



Rama Judicial del Poder Publico
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, D.E.I. y P., treinta (30) de septiembre dos mil veintiuno (2021).

| | |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Radicado | 08-001-33-33-006- 2016-00206 -00 |
| Medio de control | Nulidad y Restablecimiento del Derecho |
| Demandante | Electricaribe S.A. E.S.P. |
| Demandado | Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios |
| Jueza | Lilia Yaneth Álvarez Quiroz |

I. ASUNTO A DECIDIR

Procede el Despacho a dictar sentencia dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesto por la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, de conformidad con el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, en los siguientes términos:

II. ANTECEDENTES

DEMANDA

2.1. Pretensiones

Como pretensiones de demanda, la actora presentó las que a continuación se transcriben:

- “1. Que se declaren nulas las Resoluciones N° SSPD-S 20158200105305 del 14 de julio de 2015, y SSPD S- 20158200282045 del 23 de diciembre de 2015.*
- 2. Que se declare nula la sanción impuesta a ELECTRICARIBE mediante Resoluciones N° SSPD S-20158200105305 del 14 de julio de 2015 y SSPD S-20158200282045 del 23 de diciembre de 2015.*
- 3.. Que se restablezca el derecho y no se reconozca el acto administrativo particular y presunto reconocido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante las resoluciones N° SSPD S-20158200105305 del 14 de julio de 2015 y SSPD S-20158200282045 del 23 de diciembre de 2015.*
- 4. Que se restablezca el Derecho y se restituya a ELECTRICARIBE el valor que esta se encuentra obligada a pagar a título de sanción que asciende a \$6.443.500 por concepto de capital.*
- 5. Que se restablezca el derecho y consecuente se restituya a ELECTRICARIBE los intereses corrientes que se causen sobre las sumas pagadas por concepto de sanción.*
- 6. Que se continúe con el trámite de decisión del recurso de apelación con radicado N° 201448200710182.*

2.2. Hechos

Al realizar el estudio del cuerpo de la demanda y sus anexos, como fundamentos fácticos de las pretensiones de demanda, se transcriben los siguientes:

N y R No. 08-001-33-33-006-2016-00206-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

- Que en fecha 06 de noviembre de 2014, el usuario Belkin Guerra presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la decisión de la empresa.

- Frente al recurso presentado por el usuario, ELECTRICARIBE dio respuesta oportuna y negativa el 27 de noviembre de 2014.

-Para la notificación de la respuesta al recurso, ELECTRICARIBE agotó nuevamente, el trámite dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, enviando la citación para notificación personal día 28 de noviembre de 2014.

-Teniendo en cuenta que el usuario no acudió a la sede de la empresa a notificarse personalmente, el día 09 de diciembre de 2014 se elaboró aviso para notificación, el cual fue insertado en el correo el día 10 de diciembre de 2014.

- Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios formuló pliego de cargos a ELECTRICARIBE y posteriormente la SSPD mediante Resolución SSPD S-20158200105305 del 14 de julio de 2015 resolvió:

- Sancionar a ELECTRICARIBE S.A. ESP, con multa consistente en \$ 6.443.500 seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos pesos.
- Reconocer los efectos del silencio administrativo positivo

- Que mediante Resolución SSPD-S 20158200282045 del 23 de diciembre de 2015 fue confirmada la Resolución No. SSPD S-20158200105305 del 14 de julio de 2015.

2.3. Fundamentos de derecho, normas violadas y concepto de violación.

Como fundamentos de derecho, normas violadas y concepto de su violación, presentó la parte actora los argumentos que a continuación se resumen:

❖ Primer cargo:

Infracción de las normas en que deberían fundarse. El artículo 158 de la Ley 142 de 1994 únicamente sanciona con silencio administrativo positivo a la falta de respuesta dentro del plazo de 15 días, este artículo no sanciona con silencio administrativo positivo los yerros ocurrido durante el proceso de notificación.

El artículo 158 de la Ley 142 de 1994 únicamente sanciona con silencio positivo la omisión de la empresa de contestar las peticiones de los usuarios dentro del plazo de 15 días.

En este caso las resoluciones demandadas infringen las normas en que deberían fundarse porque la SSPD argumenta que ELECTRICARIBE no cumplió con el artículo 158 de la Ley 142 de 1994; pero en este caso está probado que ELECTRICARIBE si contestó dentro de los 15 días, toda vez que:

(i) - La respuesta al recurso fue proferida el 27 de noviembre de 2014 antes de que se cumplieran 15 días para el acaecimiento del silencio administrativo positivo.

N y R No. 08-001-33-33-006-2016-00206-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

(ii) ELECTRICARIBE envió por correo certificado, las citaciones para notificación personal de las respuestas.

(iii) ELECTRICARIBE envió oportunamente el aviso para notificación, la cual probó ser efectiva porque el usuario presentó queja ante la superintendencia, haciendo mención a la respuesta que la empresa dio al recurso, por lo que no es verdad que la respuesta fue dada por fuera del término.

Por lo tanto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no puede sancionar a ELECTRICARIBE por infringir el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 cuando en este caso está probado que ELECTRICARIBE si cumplió con la única obligación contenida en este artículo que es precisamente la de dar respuesta dentro del plazo legal.

No puede derivarse un silencio administrativo positivo derivado de supuestos no contenidos en la norma que contempla dicho silencio. Se repite, que la única obligación de la empresa bajo el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 es contestar a tiempo, lo cual se hizo en el caso en estudio.

❖ Segundo cargo:

Infracción de las normas en que debería fundarse: infracción del artículo 69 de la ley 1437 de 2011 esta norma no establece el término perentorio de un (1) día para enviar la notificación por aviso.

Electricaribe manifiesta que en el caso que nos ocupa la SSPD reconoció un silencio administrativo positivo y sancionó a ELECTRICARIBE al considerar que envió el aviso para notificación del usuario fuera del término fijado por el artículo 69 del CPACA, sin embargo, esa norma no establece ningún término perentorio para el envío del aviso.

❖ Tercer cargo:

Infracción de las normas en que debería fundarse, el vacío contemplado en el artículo 69 del CPACA para la remisión del aviso debe llenarse con la aplicación analógica del artículo 68, por disposición del artículo 30, inciso 2 de la Ley 57 de 1887 y artículo 8 de la Ley 153 de 1887.

Toda vez que el artículo 69 del CPACA no estableció un término para la remisión del aviso el vacío normativo debe ser llenado, conforme al Artículo 30, inciso 2 de la Ley 57 de 1887 y artículo 8 de la Ley 153 de 1887 por una disposición que en el mismo CPACA o en otra ley regule una materia semejante.

Como se puede observarse trata de la regulación de una materia semejante, ya que el artículo 68 del CPACA regula el envío de una citación para que el usuario comparezca a notificarse personalmente, y en el caso del artículo 69 del CPACA se trata de la remisión o envío y entrega del aviso, para notificar por aviso al usuario, ante la fallida notificación personal.

No existiría ninguna justificación para. Señalar que en el caso del envío de la citación para la notificación personal el término es de cinco (5) días mientras que en el caso de la remisión o envío del aviso el término tenga que ser de un (1) día, por el vacío de la norma al no señalar un término para ello, siendo que se trata de acto similar (envío de una

N y R No. 08-001-33-33-006-2016-00206-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

citación y envió de un aviso). Incluso, se podría pensar que el envío de la citación es más sencillo que el envío del aviso, porque este tiene más requisitos que la citación, y la notificación por aviso se entiende surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega efectiva del mismo en el lugar de destino.

2.4. Contestación de la Demanda

2.4.1. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Respecto de las pretensiones consignadas en el petitum de la demanda, me opongo a todas y cada una de ellas en consideración a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que me permito hacer valer.

El demandante pretende la nulidad de la Resolución SSPD 20158200105305 del 14/07/2015 y de la Resolución 20158200282045 del 23/12/2015 que confirma el numeral 1 de la Resolución que sanciona y como restablecimiento del derecho se restituya a ELECTRICARIBE el valor pagado a título de sanción por suma de \$6.443.500 por concepto de capital, los intereses causados.

Señala el demandante que el único requisito que exige el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 es contestar dentro del término y está probado que Electricaribe contestó antes de los 15 días que tenía para dar respuesta, por lo que no hubo silencio administrativo conforme al artículo 158 de la Ley 142 de 1994.

Señala además que ELECTRICARIBE cumplió con los requisitos de los artículos 68, 69 y 72 del CPACA para notificar al usuario. Frente a estos argumentos se interpone excepción de legalidad de los actos demandados en fundamento a que dentro del trámite administrativo sancionatorio se pudo establecer por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que la empresa prestadora de servicio no respondió de fondo la petición del usuario dentro del término legal configurándose un silencio administrativo positivo, vulnerando la empresa lo regulado por el Art. 158 de la ley 142/94, puesto que para que la decisión surta efectos debe ser debidamente notificada al usuario en aplicación de lo dispuesto en los art. 68, 69 y 72 del CPACA, en la investigación administrativa por las pruebas practicadas se pudo establecer que la empresa no cumplió cabalmente con el trámite de la notificación, en especial lo señalado en el art. 69 del CPACA, configurándose de este modo el Silencio Administrativo Positivo, cuyos efectos la demandante no reconoció dentro del término de las 72 horas siguientes a su ocurrencia.

De la misma forma se ejerce oposición a las pretensiones de la demanda con las siguientes excepciones: No se demanda el acto ficto o presunto emanado de la declaratoria del Silencio Administrativo Positivo, por lo cual así se declarara la nulidad de los actos administrativos demandados quedaría incólume el acto presunto por no haber sido atacado; Falta de legitimación en la causa de la SSPD respecto de la pretensión de devolución de las sumas canceladas por concepto de la multa impuesta a ELECTRICARIBE, las sumas recaudadas por dicho concepto no entran al patrimonio de mi representada sino a un patrimonio autónomo denominado Fondo Empresarial de la SSPD cuyo vocero es la Fiduciaria Bogotá S.A. quien para restituir dichas sumas deberá ser vencida en juicio; inexistencia de responsabilidad civil del Estado (SSPD) por la expedición de sanción (multa) por configuración del Silencio Administrativo Positivo, toda vez que no puede predicarse antijuridicidad de la acción sancionatoria del Estado.

N y R No. 08-001-33-33-006-2016-00206-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

2.5. Alegatos.

Electricaribe E.S.P S.A, presentó alegatos de conclusión dentro del término legal ratificando los cargos propuestos con la demanda, al igual que la Superintendencia de Servicios Públicos quien presentó alegatos de manera oportuna ratificando los argumentos propuestos en la contestación de la demanda y en las excepciones.

2.6. Concepto del Ministerio Público.

El Ministerio público no emitió pronunciamiento dentro presente proceso.

III. TRAMITE PROCESAL

- La demanda fue presentada el 26 de agosto de 2016 y repartida a esta Judicatura en esa misma fecha, y admitida en fecha 08 de noviembre de 2016.
- Surtidos los trámites de notificación, la demanda fue contestada por la Superintendencia mediante escrito de fecha 20 de junio de 2018.
- De las excepciones propuestas, se corrió traslado mediante fijación en lista.
- Mediante auto de fecha 24 de mayo de 2021 de conformidad a lo señalado en el artículo 182 A de la Ley 2080 de 2021, se prescindió de la realización de la audiencia inicial, se incorporaron pruebas, se fijó el litigio y se corrió traslado para alegar de conclusión.
- Finalmente, y vencido el referido traslado para alegar, ingresa el proceso al Despacho en estado de dictar sentencia.

IV. CONSIDERACIONES.

4.1. Validez de la actuación.

Revisadas las actuaciones procesales, no observa este Juzgado irregularidades procedimentales que conlleven a declarar la nulidad total o parcial de lo actuado.

4.2. Problema jurídico: El problema jurídico en el presente asunto se concreta en determinar, si los actos acusados están inmersos en causal de nulidad, de acuerdo a los cargos propuestos en el escrito de demanda, al haberse sancionado a ELECTRICARIBE S.A E.S. P, por la configuración del silencio administrativo positivo.

Lo anterior pasa por determinar lo siguiente:

Si los trámites de notificación realizados por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., al momento de notificar por aviso la respuesta del recurso presentado por la usuaria Belkin Guerra, se ajustaron a lo dispuesto en las normas que regulan la materia (artículo 159 de la Ley 142 de 1994 y artículos 67, 68 y 69 del C.P.A.C.A.), en el entendido que la falta de notificación de la respuesta ocasiona el silencio administrativo positivo, origen de la sanción a la prestadora de servicios públicos.

N y R No. 08-001-33-33-006-2016-00206-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

4.3. Tesis del Juzgado: En el presente asunto, el Despacho sostendrá la tesis que, ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., al momento de notificar respuesta al recurso presentado por la usuaria Belkin Guerra, incumplió con las formalidades establecidas en el inciso primero del artículo 69 del C.P.A.C.A para la notificación por aviso, generándose el silencio administrativo positivo, motivo de la sanción, por lo tanto los actos demandados no se encuentran incursos en las causales de nulidad alegadas.

4.4. Marco jurídico.

4.4.1. Sobre la notificación de decisiones administrativas de entidades prestadoras de servicio público domiciliario.

El artículo 159 de la Ley 142 de 1994, el cual se refiere al tema de la notificación de las decisiones sobre peticiones y recursos, preceptúa:

"Artículo 159. De la notificación de la decisión sobre peticiones y recursos. La notificación de la decisión sobre un recurso o una petición se efectuará en la forma prevista por el Código Contencioso Administrativo. El recurso de apelación sólo se puede interponer como subsidiario del de reposición ante el Gerente o el representante legal de la Empresa, quien deberá en tal caso remitir el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Una vez presentado este recurso al mismo se le dará el trámite establecido en el Código Contencioso Administrativo.

Si dentro del trámite de la apelación, la Superintendencia de Servicios Públicos estima necesario practicar pruebas o el recurrente las solicita, deberá informar por correo certificado a las partes, con la indicación de la fecha exacta en que vence el término probatorio, que no puede ser superior a treinta (30) días hábiles, prorrogables hasta por otro tanto.

Parágrafo. Una vez presentado en forma subsidiaria el recurso de apelación, las partes podrán sustentar y aportar pruebas a la Superintendencia para que sean tenidas en cuenta al momento de resolver en segunda instancia"

Bajo la anterior premisa normativa, es necesario remitirse a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, "Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", en materia de notificaciones, que son del siguiente tenor literal:

ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO. *Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.*

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal.

N y R No. 08-001-33-33-006-2016-00206-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

4.5. Caso Concreto.

Con la demanda de la referencia, Electricaribe, solicita la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos:

a) Resolución SSPD S-20158200105305 del 14 de julio de 2015 expedida por la Directora General Territorial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la que impuso multa equivalente a \$6.443.500 en contra de Electricaribe S.A. E.S.P., por encontrarla culpable de la ocurrencia de silencio administrativo positivo en relación con petición que le realizó la usuaria Belkin Guerra.

b) Resolución SSPD-S 20158200282045 del 23 de diciembre de 2015, expedida por la Directora General Territorial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la que, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución sanción.

4.5.1. Análisis crítico de los cargos frentes a las pruebas y premisas normativas.

Primer Cargo de Nulidad // Infracción de las normas en que debería fundarse. el artículo 158 de la ley 142 de 1994 únicamente sanciona con silencio administrativo positivo la falta de respuesta dentro del plazo de 15 días, este artículo no sanciona con silencio administrativo positivo los yerros ocurridos durante el proceso de notificación.

Manifiesta la empresa accionante que el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 contempla la ocurrencia del silencio administrativo positivo, únicamente cuando no se da respuesta a la respectiva solicitud dentro de los 15 días siguientes a su presentación.

No obstante, lo anterior, indica Electricaribe, que en los actos acusados se le impone sanción por supuesta ocurrencia de silencio administrativo positivo, sin atenderse que cumplió con su obligación de responder la solicitud dentro de los 15 días referidos.

Valorado el cargo en estudio, precisa el Juzgado que el mismo no ostenta vocación de prosperar.

La tesis anterior, tiene fundamento en los argumentos de hecho y de derecho que se desarrollan a continuación:

El artículo 158 de la Ley 142 de 1994, impone a las empresas destinatarias de la norma, como Electricaribe S.A. E.S.P. la obligación de responder los recursos, quejas y peticiones dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación del recurso, queja o petición.

La misma norma contiene una sanción para los casos en que la empresa no cumpla con la obligación de responder dentro del término aludido, dicha sanción consiste en que frente a la omisión de la empresa se entiende configurado un silencio administrativo positivo a favor del peticionario.

Al respecto, así reza la norma en cita:

“Artículo 158. Del término para responder el recurso. La empresa responderá los recursos, quejas y peticiones dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. Pasado ese término, y salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspicio la demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá que el recurso ha sido resuelto en forma favorable a él”.

Ahora bien, analizado el tema respecto al trámite de respuesta y notificación de la misma por parte de la entidad administrativa, para la configuración del silencio administrativo, sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta en sentencia de 13 de septiembre de 2017, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Exp. N° 05001-23-31-000-2011-00984-01 (21514) sostuvo:

“3.1 El silencio administrativo es un fenómeno en virtud del cual la ley contempla que, en determinados casos, a la falta de decisión de la administración frente a peticiones o recursos elevados por los administrados, se le da un efecto que puede ser negativo o positivo. Ese efecto se conoce como acto ficto o presunto pues, aunque en tales eventos no exista una decisión expresa que contenga la voluntad de la administración frente al asunto que ha sido sometido a su consideración, la ley le da al silencio de la administración unos efectos similares a los del acto administrativo expreso. La razón de ser del fenómeno del silencio administrativo es la de evitar que los asuntos que la administración debe resolver queden sin decidir de manera indefinida.

3.2 Existen algunas diferencias entre los efectos del acto ficto negativo y del acto ficto positivo. Una de ellas es que mientras que la ocurrencia del silencio negativo no impide que la administración se pronuncie sobre el asunto, a pesar de haber transcurrido el plazo legal para ello, la configuración del silencio positivo genera un acto presunto que tiene que ser respetado por la administración.

*3.3 Ahora bien, para que se configure el fenómeno del silencio positivo se deben cumplir tres requisitos i) que la Ley le haya dado a la administración un plazo dentro del cual debe resolver la petición, recurso etc. ii) que la Ley contemple de manera expresa que el incumplimiento del plazo tiene efectos de silencio positivo (en nuestro ordenamiento, la regla general es el silencio negativo); iii) que la autoridad que estaba en la obligación de resolver, no lo haya hecho dentro del plazo legal, respecto de este último requisito, ha dicho la sala que dentro del plazo señalado no solo debe emitirse la decisión, sino notificarse en debida forma.”
 (Negrita y subrayado fuera del texto)*

En ese sentido de acuerdo a lo señalado por el Consejo de Estado, es completamente claro que en el aludido trámite de respuesta se encuentra inmerso la notificación de la misma, que debe realizarse dentro del mismo término de los 15 días hábiles señalados en el artículo 158 de la ley 142 de 1994, entendiendo que la sola expedición del acto o respuesta en sí, no es suficiente para el cumplimiento o resolución de la petición, toda vez que el espíritu de la norma es precisamente que el usuario efectivamente sea depositario de una respuesta concreta y de fondo, contra la cual si es menester pueda interponer los recursos de Ley o controvertir, y la sola redacción de la respuesta sin la debida publicidad o notificación vulnera el derecho al debido proceso y defensa que tiene el usuario,

N y R No. 08-001-33-33-006-2016-00206-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

escenario por el cual se establece la sanción del silencio administrativo positivo como mecanismo para contrarrestar y equiparar las cargas existentes entre la empresa prestadora del servicio y el usuario.

Respecto al tema de la notificación, tenemos que artículo 158 de la ley 142 de 1994, si bien establece el término en el cual deben resolverse las quejas y peticiones, no indica la forma en que deben notificarse las respectivas respuestas. Esa forma de notificación se encuentra regulada en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994.

Véase entonces, como la misma Ley que la parte actora utiliza para fundamentar el presente cargo, para efectos de notificación de la respectiva respuesta, remite a la Ley 1437 de 2011.

Conforme lo anterior, nótese como existe integración normativa entre los artículos 158 y 159 de la Ley 142 de 1994, con los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, de la cual se desprende que la obligación, so pena de ocurrencia de silencio administrativo positivo, que tiene Electricaribe, no solo se reduce a contestar la reclamación administrativa dentro de los 15 días siguientes a su presentación, sino que va más allá y abarca también el trámite de notificación, dentro de los términos que la ley otorga para ello. Todo lo cual se contrapone al argumento soporte de este cargo de nulidad, el cual, por las mismas razones se declara impróspero.

Segundo y tercer Cargo de nulidad

// Infracción de las normas en que debería fundarse: infracción del artículo 69 de la ley 1437 de 2011 esta norma no establece el término perentorio de un (1) día para enviar la notificación por aviso.

//Infracción de las normas en que debería fundarse, el vacío contemplado en el artículo 69 del CPACA para la remisión del aviso debe llenarse con la aplicación analógica del artículo 68, por disposición del artículo 30, inciso 2 de la Ley 57 de 1887 y artículo 8 de la Ley 153 de 1887.

El aspecto medular del presente juicio se cierne en establecer a quién le asiste la razón en cómo deben interpretarse armónicamente los artículos 69 del C.P.A.C.A. y 158 de la Ley 142 de 1994.

Este cuestionamiento reluce de la manera como la SSPD entiende el surtimiento de la notificación por aviso, interpretación según la cual, el momento para enviar esa comunicación corresponde, al día hábil siguiente a la consumación del plazo de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de la citación, esto es, al día sexto, puesto que, en su opinión, para garantizar a los usuarios y/o suscriptores sus derechos fundamentales de petición y debido proceso, no basta que la respuesta sea expedida dentro del término legal, sino además, debe ser puesta en conocimiento de aquellos que, lo debe hacer sirviéndose de la notificación por aviso, ello supone que el envío de la comunicación deba surtir inmediatamente fenecido el plazo en que no fue posible notificarlos personalmente.

Pues bien, esta agencia judicial considera que las posturas que frente a la notificación por aviso fueron denotadas por los extremos del juicio, se contraponen, aun perteneciendo a un mismo método de interpretación legal, que no es otro que, *el gramatical o textualista*.

Frente a esto, empecemos señalando que la doctrina ha establecido la existencia de diversos criterios de interpretación de las disposiciones jurídicas a fin de desentrañar pasajes oscuros o poco claros de las normas, o servir como instrumentos de guía al Juez para atribuir determinado significado al ordenamiento jurídico. Esos criterios de interpretación son: gramatical, lógico, histórico, sistemático, teleológico, pragmático-consecuencialista, criterio valorativo y de ponderación de intereses y el criterio del precedente.

En lo que corresponde a la legislación colombiana, los artículos 27 al 30 del Código Civil recogen, en suma, los métodos de interpretación establecidos por Savigny, a saber: los criterios gramatical, sistemático, histórico y teleológico, de los cuales, para el presente asunto, hemos de abordar únicamente, dos, el gramatical y el sistemático.

Así pues tenemos, que el criterio de interpretación gramatical de una determinada disposición hace referencia a la formulación de normas jurídicas con fundamento, esencialmente, en dos tipos de ejercicios por parte del intérprete, **i)** El primero, que refiere al entendimiento de la estructura sintáctica de la disposición, a fin de comprender los signos gramaticales, la naturaleza de los enunciados allí fijados (sujeto, verbo, predicado, etc), su función y las repercusiones para el entendimiento de la estructura de la oración; y **ii)** Segundo, consistente en la comprensión semántica de los términos que componen la disposición jurídica, punto en el que se ha establecido que hay lugar a interpretar las palabras bien sea en el sentido natural y obvio, el que la comunidad de hablantes le haya atribuido o siguiendo los significados técnicos que tengan, si es del caso.

En este orden de ideas, esta es la base legal para que los operadores jurídicos, en general, fundamenten la aplicación de los términos mencionados en la ley y que no encuentren significado distinto al establecido textualmente dentro del ordenamiento jurídico.

Por su parte, el criterio sistemático refiere a que la norma que se extraiga de una disposición jurídica debe encontrarse en armonía con otras normas, fines o principios del ordenamiento jurídico, de tal modo que no exista contradicciones, incompatibilidad o incongruencia entre diversas disposiciones que componen un conjunto normativo.

Este criterio obedece a la idea según la cual, el ordenamiento jurídico puede ser concebido bajo la idea de un sistema, de allí, entonces, que la coherencia y la unidad se califiquen como sus características. Esto implica, entonces, que por vía de este método puede el intérprete limitar, precisar o ampliar el radio de acción de una determinada disposición al contrastarla con otras normas consonantes con la materia que trata, pues toda disposición ha sido proferida en el marco de un amplio conjunto de disposiciones de igual jerarquía, con las que debe operar de manera consonante.

Precisado en qué consisten cada uno de los criterios de interpretación citados, viene al caso indicar que esa disposición superior a la que alude el criterio sistemático, para el caso que nos convoca, no es más que el debido proceso, derecho constitucional fundamental regulado en el artículo 29 de la Constitución Política, aplicable a toda clase de actuaciones administrativas y judiciales.

En este asunto, hemos de advertir que en disenso a lo denotado por los sujetos procesales en el objetivo de auscultar el sentido y alcance del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, nuestra posición interpretativa corresponde al *criterio sistemático*.

Bajo este método interpretativo tenemos que, si por la notificación se propugna el conocimiento real de las decisiones judiciales o administrativas con el fin de dar aplicación concreta al debido proceso, y ello tiene por objetivo, delimitar el momento en el que empiezan a correr los términos de los recursos y de las acciones procedentes, el entendimiento que se le deba predicar al artículo 69 dependerá, de cómo se integre armónicamente la carga de la administración de adelantar oportunamente las diligencias de notificación y el deber de los administrados de comparecer dentro del término legal a notificarse de aquellas personalmente; porque esas cargas y deberes terminan siendo correlativos, por comportar garantías para ambas partes y no tan solo para una de ellas.

Por consiguiente, frente al cumplimiento de la carga de expedir la respuesta y notificarla al administrado oportunamente, le figura al ciudadano el no rehusarse de comparecer dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al momento en que recibió la citación.

Sin embargo, de vencerse el plazo sin que, por alguna razón aceptable o no, aquel acuda a notificarse personalmente, el punto de partida para acometer el envío del aviso para la administración, dependerá del día a partir del cual el destinatario haya efectivamente recibido la citación en el lugar que indicó donde recibiría notificaciones, esto, para los casos en que la administración tenga conocimiento del domicilio o residencia del destinatario de la notificación y la citación no haya sido devuelta, dando cuenta de esto, la empresa de correos que haya adelantado la entrega de la comunicación, si es por este medio que fue surtida la diligencia.

Sería algo paradójico, que so capa de propugnar en la salvaguarda de las garantías fundamentales de los ciudadanos, por una interpretación gramatical con imposición de condiciones o plazos inexistentes a lo establecido objetivamente, las autoridades terminarán cercenándoles a los ciudadanos el plazo que tienen para comparecer a notificarse personalmente, por el simple apremio del vencimiento del plazo contado a partir del día en que fue remitida la primera comunicación.

Aunque el tenor del artículo 69 del C.P.A.C.A así parezca indicarlo, el sentido gramatical no puede imponerse de manera aislada a los principios constitucionales, porque, se reitera, bajo una metodología sistemática se puede vislumbrar que, el solo vencimiento del plazo desde el envío del aviso no es suficiente para imponerle a la administración el ejercicio de una carga que solo surgirá de inmediato, si transcurrido ese tiempo hay certeza del recibo de la primera comunicación por el administrado.

Las anteriores observaciones dejan claro que el uso de la interpretación textual de las palabras de la ley no puede ser tenido como único, exclusivo o excluyente criterio clarificador del sentido y alcance de un enunciado.

Recuérdese que, en el derecho fundamental al debido proceso, en el particular aspecto de las notificaciones, puede desarrollarse bajo la loable intención institucional de velar por un proceso breve, expedito y dinámico, pero que respete por igual, los intereses del ciudadano y de la administración, al tiempo que no debe pasarse por alto el abuso de las posiciones dominantes, tampoco debe auspiciarse que los administrados resulten

N y R No. 08-001-33-33-006-2016-00206-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

cobijados de beneficios, cuando provengan de la renuencia, de la desidia, o como lo dijera por el Consejo de Estado, - *por una conducta del propio interesado que pretende entabrar las funciones de la administración e impide que se surta con éxito la notificación.*

Entonces, bajo las consideraciones anteriores, se tiene que, no estaba obligada Electricaribe S.A. a remitir al usuario la respectiva notificación por aviso, un (1) día después del vencimiento de los 5 días correspondientes al envío de citación para notificación personal, toda vez que dicho término se debe comenzar a contabilizar desde el día siguiente en que efectivamente es recibida tal citación por parte del usuario. Pero si Electricaribe S.A. E.S.P., realizaba las diligencias de notificación personal y por aviso, dentro del plazo de 15 días que consagran las normas para responder y notificar la respuesta, dicho trámite resultaba válido y ajustado a derecho.

Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta la articulación existente entre los artículos 158 y 159 de la Ley 142 de 1994, con los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, de la cual se desprende que la obligación so pena de ocurrencia de silencio administrativo positivo, que tiene Electricaribe, no solo se reduce a contestar la reclamación administrativa dentro de los 15 días siguientes a su presentación, sino que va más allá y abarca también el envío de la citación para notificación personal de la respuesta y el aviso en los casos que sea procedente, dentro de los términos que la ley otorga para ello, Todo lo cual se contrapone al argumento soporte de este cargo de nulidad, el cual, por las mismas razones se declara impróspero.

Hecho que ratifica la no prosperidad del cargo, de acuerdo al contenido de las pruebas documentales existentes en el expediente, tenemos que, Electricaribe incumplió con su obligación de enviar la notificación por aviso dentro del término legal establecido en la Ley 1437 de 2011, es decir al cabo del quinto (5) día de haber culminado el término del usuario para recibir notificación personal, el cual comienza a correr al día siguiente de haberse recibido efectivamente la correspondiente citación.

A propósito, véase:

- El **06 de noviembre de 2014**, el usuario presentó el respectivo recurso a Electricaribe S.A. E.S.P.

- A partir de la solicitud presentada, la empresa contaba con quince (15) días hábiles para proferir la respectiva respuesta, los cuales vencían el **28 de noviembre de 2014**, profiriendo decisión empresarial en término en fecha **27 de noviembre de 2014**.

- En fecha **28 de noviembre de 2014** se remite citación de notificación personal, y recibida efectivamente en fecha **04 de diciembre de 2014**, y teniendo el usuario entre el **05 y el 12 de diciembre de 2014** para comparecer a notificarse personalmente, por lo cual la notificación por aviso debió remitirse de conformidad con la norma estudiada a partir del **13 diciembre de 2014**, y no el **10 de diciembre** como efectivamente como efectivamente se encuentra soportado en el plenario, de lo que se concluye que el trámite de notificación se realizó indebidamente, vulnerándose el debido proceso administrativo, toda vez que al enviarse la notificación por aviso antes de haberse culminado el término dispuesto por la Ley para que el usuario accediera a comparecer para recibir la notificación personal, se está recortando el derecho que le asiste la usuario de contar con un término amplio de (5) días y se estaría concediendo un término menor, desconociendo los principios que rigen la actuación administrativa, como lo son el debido proceso, en el

N y R No. 08-001-33-33-006-2016-00206-00
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Demandado: SUPERSERVICIOS.

entendido que ésta, no se rige solamente por la normatividad específica que la regula, sino también en virtud de la integración normativa, se deberán atender principios y normas de carácter Constitucional .

4.5.2. Conclusión.

Una de las características de los actos administrativos acusados es la presunción de legalidad, lo que concordado con el art. 167 del C.G.P), impone a quien pretende la nulidad de dichos actos administrativos, la carga de demostrar la ocurrencia de los cargos de nulidad que proponga en contra de esos actos.

Pues bien, en el presente caso se evidenció que ninguno de los cargos propuestos por Electricaribe S.A. E.S.P. tuvo vocación de prosperar y se declararon no probados, por lo que la presunción de legalidad que reviste a los actos administrativos acusados se encuentra incólume, esto es, no fue desvirtuada.

En este panorama menester es negar todas las pretensiones de la demanda de la referencia, lo cual se hará en la parte resolutive de esta sentencia.

V. CONDENA EN COSTAS

Finalmente, el Juzgado no condenará en costas, en razón de que la parte vencida no asumió en el proceso una conducta que la hiciera merecedora a ello, tal como el haber incurrido en temeridad, irracionalidad absoluta de su pretensión, en dilación sistemática del trámite o en deslealtad.

En mérito de lo expuesto, **el Juzgado Sexto (06) Administrativo Oral de Barranquilla**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR, conforme a la parte motiva de esta sentencia, todas las pretensiones de la demanda de la referencia.

SEGUNDO: Sin en costas en esta instancia.

TERCERO: NOTIFICAR personalmente esta providencia a la Señora Procuradora, agente del Ministerio Público ante este Juzgado.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, **ARCHÍVESE** el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LILIA YANETH ÁLVAREZ QUIROZ
Juez

L.P.V

Firmado Por:

Lilia Yaneth Alvarez Quiroz
Juez Circuito

N y R No. 08-001-33-33-006-2016-00206-00
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Demandado: SUPERSERVICIOS.

**Juzgado Administrativo
Contencioso 006 Administrativa
Barranquilla - Atlantico**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0c5e607e1d161b3999bb4ba59b6c4fbd67f04f2de3e2d4fc6563f774f16e43e7**
Documento generado en 30/09/2021 06:07:38 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>